

Seguridad binacional

José Luis Piñeyro

15 de abril de 2006

Las marchas realizadas el lunes pasado en más de 125 ciudades de 40 estados de la Unión Americana mostraron su enorme fuerza real y potencial para exigir respeto y la legalización de casi 12 millones de indocumentados. Hicieron patente que existen, viven ahí, y son parte de la fuerza de trabajo generadora de la riqueza de esa nación.

Las manifestaciones fueron una demostración de fuerza de la comunidad latina de EU, donde se dejó atrás la dispersión, la división y el temor a exigir sus derechos laborales y ciudadanos.

Lo paradójico es que fueron los políticos conservadores y racistas quienes lograron unir no sólo a los mexicanos, que representan el 60% de los trabajadores indocumentados, sino a los latinos en general, mano a mano con chinos, coreanos, árabes y africanos.

Este movimiento comienza a gestarse con la aprobación en diciembre pasado de la iniciativa Sensenbrenner por la Cámara de Representantes, la cual pretendía parar la migración ilegal tipificándola como delito; asimismo, penalizaba la ayuda que alguna persona pudiera dar a los indocumentados, aún cuando se tratara de un familiar; dicha iniciativa también destinaba una enorme cantidad de recursos monetarios para construir un muro en la frontera con México.

Como cualquier coyuntura crítica, esta que se abrió con la aprobación de la iniciativa Sensenbrenner está mostrando a los diferentes actores políticos y sociales divididos de acuerdo con sus intereses.

Hoy podemos observar dentro del mismo bando de los migrantes ilegales y sus comunidades a un sector de empresarios que dependen de ellos para ocupar empleos poco atractivos y con bajos salarios.

Por ejemplo, al menos 90% de la cosecha anual de vegetales en Estados Unidos está en riesgo de perderse por la escasez de trabajadores agrícolas latinos, declaró Tom Nassif, presidente de la Asociación de Agroindustrias del Oeste de Estados Unidos y, por su parte, Austin Pérez, portavoz de la Federación Estadounidense de Agroindustrias, consideró que de cerrarse la posibilidad de cruce fronterizo de ilegales, habrá una pérdida de nueve mil millones de dólares anuales.

Pero no se trata sólo de un problema económico, en la discusión de la reforma migratoria en Estados Unidos también surge el tema de la seguridad fronteriza y nacional.

Se plantean dos argumentos básicos: la urgencia de lograr mayor control antiterrorista y migratorio de la frontera con México y la necesidad de recuperar el control gubernamental interno, disminuido por la existencia de millones de personas viviendo como ilegales en su territorio.

Sin duda, la única manera de contar con información confiable sobre estas personas e integrarlos a la sociedad (dado que es del todo inviable su expulsión masiva) es a través de la llamada amnistía, es decir, la regularización de su situación migratoria, si no de todos al menos de la mayoría. Así, el gobierno estadounidense fortalecería el control poblacional y antiterrorista interno.

Respecto al control migratorio de las fronteras, la solución es regional y debe derivarse de un plan binacional. El gobierno estadounidense debe reconocer que los muros o mayor vigilancia policial no detendrán a una sobreoferta de mano de obra de un lado de la frontera y una sobredemanda del otro.

Es obligación del gobierno mexicano plantear a su homólogo estadounidense que la solución del problema migratorio pasa necesariamente por un programa de desarrollo económico conjunto basado en fondos preferenciales de inversión y de comercio.

México no va a parar el flujo migratorio mientras no se instrumente aquí una política económica y fiscal que disminuyan el enorme desempleo y desigualdad social, así como una política de desarrollo regional que amiore la enorme pobreza prevaleciente en ciertas zonas. No es un asunto de "enchiladas", es cuestión de plantear opciones de desarrollo presente y futuro.

Ya se están presentando represalias de grupos xenofóbicos estadounidenses contra los paisanos, como el despido laboral de quienes participaron en las manifestaciones; esperamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores cumpla con una de sus obligaciones: defender a nuestros connacionales en el exterior.

Por último, apoyemos la convocatoria de organizaciones sindicales y civiles de México y Estados Unidos para "no" consumir productos estadounidenses este primero de mayo, como muestra de solidaridad con la resistencia civil de los latinos en ese país.

P.D. Para Martín y Víctor, quienes, como millones de mexicanos ilegales, contribuyen al bienestar y la seguridad de Estados Unidos.

jlpinero@aol.com

Profesor investigador UAM-A